

EDITORIAL

LAS CONDICIONES OBJETIVAS DEL MOVIMIENTO LABORAL EN EL SALVADOR

La rápida y creciente reactivación del movimiento laboral en El Salvador hace prever el resurgimiento de una coyuntura político-laboral que había sido reprimida al inicio de los años ochenta. El resurgir laboral se vuelve evidente desde 1985, año en que se suscitaron no menos de 65 paros laborales involucrando a cerca de 60,000 trabajadores. La actividad sindical y gremial de los primeros meses de 1986, refleja una mayor disposición de los trabajadores a luchar por sus intereses y alcanzar mayores niveles de organización y unidad, abarcando a sectores que antes mostraron una actitud pasiva; la creación de la UNTS, las masivas movilizaciones que han concentrado a más de 60.000 personas en las calles de San Salvador, los continuos y crecientes paros laborales, son una muestra de la tendencia ascendente del movimiento laboral en El Salvador.

Este resurgimiento laboral cobra mayor notoriedad por el hecho de darse en una situación en la que todavía persisten las condiciones que antes lo reprimieron: la persecución, captura y, en algunos casos, asesinato de líderes sindicales, las amenazas y calumnias, los despidos masivos, en fin, la negación de sus derechos. La actividad sindical y gremial en El Salvador representa un alto grado de riesgo para las personas que la desarrollan; el que los trabajadores estén dispuestos a correr ese riesgo sólo puede ser explicado porque exista un motivo más fuerte que los impulsa, y el único motivo que puede llevar al hombre a arriesgarse de esa manera es la lucha por la vida. Es innegable el continuo y acelerado deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de salvadoreños, encontrándose actualmente en serio peligro las posibilidades de sobrevivencia del trabajador y su familia; ahí radican las condiciones objetivas del resurgir laboral en El Salvador.

Ciertamente, las características de una economía en guerra como la nuestra han acelerado el deterioro de las condiciones de vida; pero al igual

que la guerra misma, las causas originarias que explican el problema no se encuentran en los acontecimientos de los últimos años. Las condiciones objetivas para el descontento laboral y para el auge de las luchas reivindicativas de los trabajadores salvadoreños son el resultado de las injustas estructuras sociales, políticas y de concentración de la propiedad y del ingreso que se han conformado históricamente y que han conducido a la progresiva marginación de las mayorías populares. Es decir, el problema de la sobrevivencia de los salvadoreños no es reciente y se ha manifestado de múltiples formas a lo largo de la historia de nuestro país; desde las dificultades para adquirir los bienes y servicios indispensables con el salario devengado, hasta la dificultad misma de obtener una fuente de ingresos.

En efecto, las tendencias estructurales de nuestra economía han conducido a la conformación de un aparato productivo oligopólico, es decir, una estructura productiva en la que predomina la gran empresa, que además de posibilitar una mayor concentración del ingreso, va perdiendo su capacidad de generar empleos por la utilización de métodos intensivos en capital. Así, por ejemplo, para 1978 en la industria manufacturera, por cada millón de colones invertidos en activos fijos, la pequeña empresa tenía capacidad de generar 150 empleos, mientras que la grande solamente 43; sin embargo, es la gran empresa la que tiende a fortalecerse y a ejercer la hegemonía en la actividad económica. Esta característica unida a una población creciente, conduce inevitablemente a la generalización del desempleo y/o del subempleo.

Por otro lado, aún aquellos que tienen la suerte de obtener empleo, no pueden garantizar su sobrevivencia por los bajos salarios que perciben. Según datos del Ministerio de Planificación, el 91 % de los ocupados en 1980 percibían ingresos mensuales inferiores a 600 colones; mientras que otras investigaciones estimaban que para satisfacer mínimamente las necesidades básicas de una familia típica de 5 miembros se requería en ese año un ingreso de 780 colones mensuales. De ahí que no es de extrañar que, según el Ministerio de Salud Pública, ya para 1979 más del 74 % de los niños menores de 5 años estaban desnutridos. Tampoco es de extrañar que para finales del setenta la organización y lucha de los trabajadores se había intensificado y ampliado, abarcando a la mayoría de los sectores obreros y campesinos, a los trabajadores estatales, a los estudiantes y sectores medios.

El acelerado deterioro económico, social y político de los años ochenta, potencia las condiciones para el descontento laboral a través de un mayor desempleo, alza acelerada en el costo de la vida, medidas económicas inadecuadas, intensificación de la represión principalmente contra los sectores organizados del pueblo, y los efectos directos e indirectos de la guerra.

Sólo entre junio de 1979 y septiembre de 1981, cerraron 198 empresas con más de 20.000 trabajadores, generalizándose el problema del desempleo abierto que actualmente supera el 35%, mientras que el 80% de la población ocupada estaría subempleada. Todo ello aunado a la intensifi-

cación del proceso inflacionario que deteriora la capacidad adquisitiva de los que aún tienen trabajo.

Según estimaciones oficiales, de diciembre de 1979 al mismo mes de 1985, el costo de la vida en El Salvador podría haber aumentado en 150%; es decir, si en 1979 para satisfacer mínimamente las necesidades básicas de una familia salvadoreña de 5 miembros se requería un ingreso de 767 colones mensuales, para 1985 dicho ingreso familiar mínimo debería haber sido superior a los 1900 colones. Dado el salario mínimo vigente en 1985, ni aún trabajando los dos miembros adultos del grupo familiar lograrían cubrir la mitad del ingreso mínimo requerido. En este sentido, resulta acertado el planteamiento del Ministerio de Planificación en su "Diagnóstico Económico Social 1978-1984", en el que reconoce que "uno de los efectos inmediatos de la crisis es la modificación de la estructura de distribución del ingreso, aumentando la concentración de los ingresos más altos y reduciendo la proporción de los ingresos de menores niveles".

Así como en épocas de auge económico los frutos del crecimiento no se distribuyen equitativamente entre los diferentes agentes que en él participan; los costos y sacrificios de la crisis y de la guerra se distribuyen, así mismo, injustamente entre los diferentes sectores económicos y sociales, descargando más su peso en aquellos sectores tradicionalmente marginados y desposeídos, y que constituyen la mayoría de la población.

En este proceso es notorio el papel desempeñado por la política económica y resulta muy claro hacia donde se orientan los beneficios de estas medidas. Por un lado, se congelan los salarios y los puestos de trabajo, se descargan mayores impuestos sobre los sectores de menores ingresos y se permite el alza acelerada de los precios; y por otro, se conceden más créditos e incentivos al gran capital y se le crean todas las condiciones necesarias para minimizar el "riesgo" o la "incertidumbre" derivada de la crisis y "proteger" sus ganancias. Todo ello indudablemente tiende a favorecer el proceso de concentración y centralización del capital, como método idóneo de los grandes empresarios para salvaguardarse de la crisis: sólo "sobreviven" los más fuertes; evidentemente ese proceso se realiza en detrimento de los medianos y pequeños empresarios y, principalmente, a costa de las mayorías populares:

El acelerado deterioro de las condiciones de vida de la población salvadoreña en los años ochenta no sólo ha sido resultado de factores puramente económicos, sino también y en mútua interdependencia, de factores políticos y sociales, llegando incluso a afirmarse que el problema principal actualmente en El Salvador es de tipo político o que, en todo caso, para resolver la problemática económica es preciso encontrar primero alternativas de solución al problema político. La máxima expresión de la problemática política es la guerra, que se ha profundizado y extendido abarcando todos los ámbitos de la vida nacional, absorbiendo la mayor parte de los recursos de la nación y posibilitando una creciente intervención norteamericana; todo ello profundiza la crisis, cuyo mayor peso se hace sentir en las mayorías populares.

Por un lado, son las mayorías populares las que sufren los efectos inmediatos y directos de la guerra: son ellas las que ponen los muertos, las víctimas de los bombardeos, las que ponen los soldados a través del reclutamiento forzoso, las que son desplazadas de sus lugares de origen, las que pierden sus cosechas y sus hogares. Por otro lado, sobre las mayorías populares se descarga el peso del financiamiento de la guerra a través de medidas de política económica que se traducen en mayores impuestos, recortes presupuestarios hacia aquellas ramas de la administración pública que prestan algún tipo de servicio social, alza acelerada de los precios, "paquetes económicos", etc.

La guerra ha pasado a convertirse en el centro alrededor del cual gira la vida económica, social y política del país; en su nombre se solicita la "colaboración" y el sacrificio de "todos" los salvadoreños, se invoca la "ayuda" norteamericana, se persigue a los salvadoreños "disidentes", se combate a los sindicatos y gremios representativos, se prorroga indefinidamente el estado de sitio, se ataca la libertad de expresión, en fin, se violan los derechos humanos y políticos de los salvadoreños. Los sectores laborales y populares en general, sienten cada vez más el peso directo e indirecto del conflicto, cuya prolongación y profundización no hace más que agudizar la crisis y el deterioro de sus condiciones de vida.

Los sectores laborales toman cada vez más conciencia de las dimensiones políticas de la crisis y de su influencia determinante en el plano económico. El programa de estabilización y reactivación económica, implementado en enero pasado y definido como un "paquete de guerra", constituyó para los trabajadores salvadoreños una muestra clara de la subordinación de lo económico a lo político, de como la guerra se inserta en primer plano de la vida nacional y de como su financiamiento tiende a extraerse principalmente de los sectores populares, agravando sus ya inaguantables condiciones de vida. Los trabajadores luchan fundamentalmente por mejorar su situación económica, pero cada vez resulta más claro para ellos que eso no será posible mientras no se resuelva el problema político, mientras se amplíe y profundice la guerra; de ahí que sus demandas necesariamente rebasan las reivindicaciones económicas y exigen soluciones políticas a la crisis.

La guerra se ha convertido en el elemento objetivo que determina fundamentalmente el agudizamiento actual del deterioro de las condiciones de vida de la población; por ello y principalmente en los últimos meses, en la medida que el conflicto armado se agrava y las políticas implementadas para su financiamiento hacen sentir progresivamente sus efectos negativos sobre la población, las demandas laborales han adquirido cierto contenido político, incorporando dentro de sus exigencias la solución política del conflicto. El atribuir este cambio cualitativo en el movimiento laboral a una penetración o infiltración izquierdista, es un intento inútil por tratar de ocultar o negar una realidad que el mismo gobierno se ha encargado de volverla más dura para las mayorías populares; la misma UNOC contempla dentro de sus demandas la solución política del conflicto y no existe argumento

posible o imaginación capaz de atribuir infiltración izquierdista dentro de esa organización.

Dado que la prioridad del gobierno continúa siendo la guerra, no puede atender ni las demandas políticas ni las exigencias económicas de los trabajadores; sin embargo, el movimiento laboral se amplía e intensifica, volviéndose "necesario" contenerlo, aunque ello signifique la destrucción del movimiento sindical y gremial. Para ello cuenta con la colaboración del IADSL y con una serie de medidas que cada vez se ponen más de moda, como lo son: la "compra" de algunos dirigentes sindicales deshonestos, promoviendo la corrupción del movimiento laboral; cuando esto no funciona, se recurre a la amenaza y captura de dirigentes sindicales; o bien, se hecha mano de recursos "legales", como el decretar ilegal cualquier acción reivindicativa de los trabajadores, como en el caso de ANDA, ANTEL, Confitería Americana, IUSA, etc., muchas veces acompañada con despidos masivos, como en ANDA y más recientemente ANTEL, Avícola Monserrat y Avícola San Luis Talpa, llegándose incluso a negar la personería jurídica a dirigencias sindicales representativas (IUSA). Por último, se recurre también a la creación de sindicatos paralelos "pro gobiernistas" o "patronales", como ANEPES en Correos, ASTA en ANTEL, intentos de hacerlo en Confitería Americana, IUSA, ANDA y otros.

Sin embargo, hasta ahora todas estas medidas y demás acciones anti-sindicales no han aminorado el movimiento laboral, más bien parece que los trabajadores adquieren más conciencia y capacidad organizativa y una mayor disposición a luchar por su vida. Definitivamente, las condiciones objetivas para el movimiento laboral se han potenciado con la ampliación y profundización de la guerra; y mientras ésta perdure, el movimiento sindical y gremial marcará una tendencia ascendente.